



24 OCT 2024
18:00 hrs



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

San Luis Potosí, S.L.P., a 10 de Octubre de 2024

ACUERDO DE RESERVA PARCIAL UPDE/FMDH/0004/2024-AR

**UNIDAD PARA LA ATENCION DE PERSONAS
DESAPARECIDAS O EXTRAVIADAS**

**ASUNTO: ACUERDO DE RESERVA PARCIAL EMITIDO POR LA
TITULAR DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE
PERSONAS DESAPARECIDAS O EXTRAVIADAS**

Nombre de la entidad

Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos

I. La fuente y el archivo donde se encuentra la información

Fuente:

Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas

Archivo:

Carpetas de Investigación o Averiguaciones Previas Penales

II. La fundamentación y motivación del acuerdo:

La Suscrita LIC. LUZ MARIA MONTES MARIANO, TITULAR DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION DE PERSONAS DESAPARECIDAS O EXTRAVIADAS, determina que resulta procedente la reserva únicamente en cuanto a la siguiente información se refiere, de la peticiónada por LUCIA AGUILAR GARCIA, en su solicitud UT-SI-P-410-240469824000410-2024:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DONDE SE ENCONTRARON FOSAS CLANDESTINAS, del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2024.

Lo anterior encuentra su FUNDAMENTO en lo establecido por la siguiente normatividad:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 6 fracción I del apartado A que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información; aunado a lo anterior la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 09



**FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ**

nueve de mayo de 2016, con última reforma publicada el 08 de abril de 2024, reglamenta el ejercicio del derecho a la información pública y señala que debe considerarse **información pública**: *“la que es creada, administrada o en posesión de los sujetos obligados, exceptuando la clasificada como reservada o confidencial.” (Artículo 3 fracción XIX de la Ley en cita).*

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

ARTICULO 17 Fracción III. El sistema para garantizar el acceso a la información pública. En el Estado de San Luis Potosí es derecho humano de todas las personas, conocer y acceder a la información pública, con las excepciones previstas en esta Constitución, y en la ley de la materia.

Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes, asentada en archivos, bases de datos y registros públicos o privados de quienes tengan el carácter de entes obligados conforme a la ley; así como a actualizar, rectificar, suprimir o mantener en reserva dicha información, en los términos de la ley. En cualquier caso, la ley protegerá a las personas contra cualquier lesión en sus derechos, resultante del tratamiento de sus datos personales.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTÍCULO 218.- Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 105. Sujetos de procedimiento penal.

Son sujetos del procedimiento penal los siguientes:

I. La víctima u ofendido;

II. El Asesor jurídico;

III. El imputado;

IV. El Defensor;

V. El Ministerio Público;

VI. La Policía;

VII. El Órgano jurisdiccional, y

VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este

Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

ARTÍCULO 119. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberá acreditar su procedencia.

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.

ARTÍCULO 120. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

...

I.- Se reciba una solicitud de acceso a la información.

ARTÍCULO 129. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.



ARTÍCULO 132. La unidad administrativa responsable de archivar y resguardar la información clasificada como reservada, la mantendrá restringida por el plazo por el que se reserva la información.

LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICION COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS.

CAPÍTULO QUINTO DE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS

...

ARTÍCULO 157. La información y documentación relacionada con las personas protegidas debe ser tratada con estricta reserva o confidencialidad, según corresponda.

La fundamentación, se encuentra en el artículo 129 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el cual establece que se considera información reservada:

"... XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público..."

Concatenado con el numeral Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 quince de abril de 2016, con última reforma publicada en el en el Diario Oficial de la federación el 18 dieciocho de nombre de 2022, que establecen:

"...TRIGÉSIMO PRIMERO. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño..."

La información solicitada actualiza los elementos de la siguiente manera:

TRIGÉSIMO PRIMERO. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

Es de señalarse, que la información relacionada con las coordenadas geográficas de cada fosa clandestina localizada del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2024, deriva de investigaciones que no cuentan con resoluciones definitivas, encontrándose en trámite ante el Ministerio Público dentro de la etapa de investigación, por lo que revelar dicha información, podría perjudicar las acciones de búsqueda e investigación que son la pauta para lograr el total esclarecimiento de los hechos, así como obstruir la persecución de los delitos, ya que la investigación se encuentra íntimamente ligada con la noción de justicia, que se ve reflejado en el acceso y desarrollo de un juicio que resuelva de forma tal que la decisión adoptada se asegure, en la mayor medida posible, una solución justa.



**FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO**
DE SAN LUIS POTOSÍ

Comprometiendo así, la procuración de justicia de las personas a las que se les han transgredido sus derechos, que al ser Víctimas de la comisión de un delito tienen derecho a un actuar de las autoridades adecuado y efectivo, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, así como, que se realice con debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva, a que los autores de los delitos con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados, y a obtener una reparación integral por los daños sufridos, pero sobre todo a conocer la suerte o el paradero de las Víctimas Directas. Existiendo para ello, el deber de lealtad y procuración de justicia de los que es garante la figura del Ministerio Público quien por mandato Constitucional, debe actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga, con absoluto apego a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales y respetando en todo momento los derechos de las Víctimas, a que obliga la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, teniendo así la obligación de resguardar y hacer uso de los datos e información obtenida, únicamente con el fin de abonar a las investigaciones. Lo que tiene apoyo en los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105, 128 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

De esa manera, considerando que dar a conocer la información solicitada, afectaría la procuración de justicia; obstruiría, limitaría u obstaculizaría las funciones del Ministerio Público durante la etapa de investigación, contraponiendo el deber de lealtad al que se está obligado como sujeto del procedimiento penal, lo cual, incluso conllevaría a la obtención de una sentencia absolutoria para el caso de que las Carpetas de Investigación lleguen a esa etapa, por lo que este deber prevalece sobre el derecho de petición del solicitante.

Concatenado a que todos los registros independientemente de su contenido o naturaleza, son estrictamente reservados dentro de la investigación, por lo que únicamente las partes que intervienen, pueden tener acceso a los mismos, lo cual, encuentra su sustento en los artículos 105 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se establece quienes son los sujetos del procedimiento penal y la reserva de los actos de investigación respectivamente, mismos que a la letra dicen:

"Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal

Son sujetos del procedimiento penal los siguientes:

- I. La víctima u ofendido;*
- II. El Asesor jurídico;*
- III. El imputado; IV. El Defensor;*
- V. El Ministerio Público;*
- VI. La Policía;*
- VII. El Órgano jurisdiccional, y*
- VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.*

Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico."

"Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme."

MOTIVACIÓN

Las fosas clandestinas según lo establecido en el Protocolo Homologado para Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en su numeral 68, las define como "sitio donde ilegalmente han sido depositados, degradados, ocultos o transportados restos humanos no arqueológicos, y/u otros indicios asociados a cuerpos o restos que sean susceptibles de procesamiento forense.", partiendo de lo anterior, esta acción ilícita trae consigo una violación múltiple y continua de toda una gama de derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en Pactos Internacionales y otros importantes instrumentos internacionales de derecho humanitario, empezando por el derecho a la vida, al localizar cuerpos exánimes, el derecho de no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, puesto que a las personas se les localizada en condiciones indignas, mismas, que ocasionan un daño irreparable tanto a las Víctimas como a sus familiares, considerando también, que se ve vulnerado el derecho a la libertad y seguridad de las personas, debido a la privación arbitraria, los aislamientos prolongados y la incomunicación coactiva a las que pueden ser sometidas las Víctimas del delito, antes de que sean privadas de la vida.

Tomando en cuenta lo anterior y atendiendo a que nos encontramos ante un tema de divulgación o transferencia de información, esta Representación Social tiene la obligación de realizar todas las acciones destinadas a salvaguardar la vida e integridad física y moral de las Víctimas Directas e Indirectas, así como, garantizarles el acceso a la justicia, por ello, la información relacionada con las COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE CADA FOSA CLANDESTINA LOCALIZADA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, encuadra en el supuesto de información reservada, debido a que la entrega de la información, podría obstaculizar las acciones y los actos de investigación de las autoridades Ministeriales o repercutir en los avances obtenidos hasta al momento o futuros, así como, dar a conocer al o los probables responsables, sin dejar de lado que se conocerían los lugares exactos donde se está investigando o donde se pueden realizar acciones u operativos para la persecución del delito, lo cual, propiciaría la sustracción de la justicia de los probables responsables; aunado a que las Carpetas de



**FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO**
DE SAN LUIS POTOSÍ

Investigación y Averiguaciones Previas Penales en las que versa la información, se encuentran aún en etapa de investigación, por ello, únicamente las partes procesales tienen acceso a la información y en ningún caso, terceros no legitimados que pudieran comprometer y no abonar nada a las investigaciones, así como es señalado en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos penales.

Lo anterior, sin disminuir el riesgo y llegar a comprometer la seguridad e integridad tanto de las Familias de las Víctimas como de los Servidores Públicos de las diferentes instituciones que intervienen en las diversas diligencias; aunado a que se vulneraría la seguridad pública, en razón de que se dejaría en un estado de indefensión a los habitantes de los lugares donde se encuentran los sitios de los hallazgos, considerando que los autores de los delitos pueden percatarse de que personas ajenas a las Víctimas o sus familiares (ya que ellos conocen sus identidades), andan rondando el sitio, quizá investigando o interrogando a vecinos del lugar, comprometiendo de esa manera la seguridad dentro de las comunidades y la integridad física de sus habitantes; ello sin dejar de lado que la integridad física del mismo solicitante o de otra persona a la que pudiera llegar la información en caso de su difusión, correría peligro, ocasionando un daño de imposible reparación, porque podrían en riesgo su vida, ya que siendo personas ajenas a las investigaciones, no tendrían conocimiento de las condiciones en las que se encuentra el sitio, la accesibilidad o peligrosidad del mismo y acudirían al lugar sin las medidas necesarias de seguridad y protección.

Por lo que siendo la Fiscalía General del Estado, la institución encargada de la procuración de justicia, que tiene las facultades para llevar a cabo investigaciones con el fin de reunir los elementos necesarios para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de las personas sujetas a procedimientos penales, lo anterior atendiendo en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento, así como, que los derechos y libertades de los imputados como de las víctima y ofendidos se respeten y no se vulneren, concatenado a que la información y documentación que versa dentro de las Carpetas de Investigación o Averiguaciones Previas Penales debe ser tratada con estricta reserva o confidencialidad, se considera pertinente no proporcionar los datos solicitados y clasificar como información **RESERVADA**, las COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE CADA FOSA CLANDESTINA LOCALIZADA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

III. El documento, la parte o las partes de los mismos, que se reservan:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE CADA FOSA CLANDESTINA LOCALIZADA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

IV. El plazo por el que se reserva la información:

Las etapas del Procedimiento Penal llevado a cabo en las Carpetas de Investigación que deriva de un hecho presuntamente constitutivo de delito se lleva a cabo mediante lo establecido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual cita:

"El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:

I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querrela u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;

II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y

III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.

La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación.

El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme"

Siendo así que la información que solicita la C. LUCIA AGUILAR GARCIA, forma parte de los registros de las Carpetas de Investigación y Averiguaciones Previas que se encuentran en etapa de investigación, es decir en la fracción I del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mencionado en supra líneas, investigación que requiere de tiempo para reunir los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos, o en su caso, todos los datos de pruebas para el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y finalmente lograr una reparación del daño, así como los recursos que pueda realizar la parte acusada, por lo que resulta incierto establecer una fecha exacta debido a que existen, inclusive, pruebas que se encuentran fuera del alcance de la Fiscalía General del Estado, siendo así, imposible establecer una fecha estimada en la que se tendría la resolución de la Carpeta de Investigación la cual depende del tiempo en el que se puedan integrar los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la asociación contra el imputado o la reparación del daño.

Por lo anterior, se considera que el plazo de reserva necesario para proteger la información sea por cinco años contados a partir del día **10 DE OCTUBRE DEL 2024 CONCLUYENDO EL 10 DE OCTUBRE DEL 2029**, y podrá reservarse por cinco años más, previa solicitud formulada por la autoridad generadora de la información, lo anterior conforme al artículo 115 párrafos primero y segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Concatenado al artículo 115 antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia del Estado, concatenado con el numeral Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas, el cual cita:

"Trigésimo cuarto. El periodo máximo por el que podrá reservarse la información será de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que el Comité de Transparencia confirme la clasificación del expediente o documento.

[...]

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco años adicionales, siempre y cuando se justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación"



V. La designación de la autoridad responsable de su protección;

Es responsable de su Protección la **LICENCIADA LUZ MARIA MONTES MARIANO, TITULAR DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION DE PERSONAS DESAPARECIDAS O EXTRAVIADAS.**

VI. Número de identificación del acuerdo de reserva;

Se registra como Acuerdo de Reserva Parcial: **UPDE/FMDH/0004/2024-AR**

VII. La aplicación de la prueba del daño;

Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de Ley General, concatenado con el artículo 118 de la LTAIPSLP, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:

- I. *Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;*
- II. *Se deberá motivar la clasificación, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acrediten el vínculo entre la difusión de la información y la afectación al interés público o a la seguridad nacional;*
- III. *Se deberán precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría un riesgo de perjuicio real, demostrable e identificable al interés jurídico tutelado de que se trate*
- IV. *Mediante una ponderación entre la medida restrictiva y el derecho de acceso a la información, deberán justificar y probar objetivamente mediante los elementos señalados en la fracción anterior, que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio que supera al interés público de que la información se difunda;*
- V. *Deberán elegir y justificar la opción de excepción al derecho de acceso a la información que menos lo restrinja y que sea adecuada y proporcional para evitar el perjuicio al interés público, evitando siempre que sea posible la reserva absoluta de documentos o expedientes; y*
- VI. *En los casos en que se determine la clasificación total de la información, se deberán especificar en la prueba de daño, con la mayor claridad y precisión posible, los aspectos relevantes de la información clasificada que ayuden a cumplir con el objetivo de brindar certeza al solicitante.*

Aplicando la prueba del daño preciso las razones objetivas por las que divulgar la información causa un daño mayor que el interés de conocerla:

Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada.

Se invoca a la fracción I del artículo 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, el cual señala los momentos en los que se puede realizar la clasificación de información, y en el caso aplica el supuesto establecido en la fracción I, es decir, cuando se reciba una solicitud de acceso a la información, como es el caso que nos ocupa que la información requerida es realizada a través de la



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

Plataforma Nacional de Transparencia mediante el folio **UT-SI-P-410-240469824000410-2024**.

Asimismo, se funda la causal aplicable para la reserva de la información solicitada en el artículo **129 fracción XI de la LTAIPSLP, el cual establece que se considera información reservada:**

"...XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público..."

Concatenado con el numeral **Trigésimo Primero** de los **Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información**, así como la Elaboración de Versiones Públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 quince de abril de 2016, con última reforma publicada en el en el Diario Oficial de la federación el 18 dieciocho de nombre de 2022.

Sirve de sustento el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B y C, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 1917, con última reforma fue publicada en el DOF el 22 de marzo de 2024; y los Artículos 205, 211 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se deberá motivar la clasificación, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acrediten el vínculo entre la difusión de la información y la afectación al interés público o a la seguridad nacional.

Modo: Bajo este criterio, la reserva de información se realiza con motivo de evitar un perjuicio significativo en la investigación de hechos con apariencia de delito, ya que hacer pública las **COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE CADA FOSA CLANDESTINA LOCALIZADA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**, podría obstaculizar las acciones de investigación y búsqueda de las autoridades Ministeriales y repercutir en los avances obtenidos hasta el momento o futuros, asimismo, su difusión permitiría dar a conocer al o los probables responsables, los lugares donde se está investigando o donde se pueden realizar acciones u operativos para la persecución del delito, lo cual, propiciaría la sustracción de la justicia de los probables responsables, en razón de que las Carpetas de Investigación y Averiguaciones Previas se encuentran aún en etapa de investigación.

Asimismo, con búsquedas adicionales se podría obtener información sobre las partes que intervienen, poniendo en riesgo la integridad física y la identidad, no solo de las Víctimas Directas o sus familiares, si no también de cada uno de los servidores públicos que han tenido intervención en las diligencias llevadas a cabo en los expedientes donde se encuentra la información que el recurrente solicita.

Tiempo: Derivado a que la información solicitada es parte de las Carpetas de Investigación y Averiguaciones Previas Penales que se encuentran a cargo de esta Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas y que las mismas se encuentran actualmente en la etapa de investigación, es susceptible de reserva en tanto no cause estado la resolución que se llegué a emitir; ya que el difundir en este momento, mismo en el que se están reuniendo los indicios para el esclarecimiento de los hechos, podrían entorpecer las investigaciones realizadas por los Ministerios Públicos, lo que provocaría



**FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO**
DE SAN LUIS POTOSÍ

que no se reúnan todas las pruebas necesarias que garanticen en el momento oportuno tener un juicio justo, vulnerando así, el pleno ejercicio de los derechos de las personas que forman parte de las investigaciones. Por otro lado, también llegaría a vulnerar la integridad de las Víctimas, familiares, Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías de Investigación, siendo susceptibles de ataques, extorciones u atentados en su contra.

Por lo anterior, se considera que el plazo de reserva necesario para proteger la información sea por cinco años contados a partir del día 10 de octubre del 2024 concluyendo el 10 de octubre del 2029.

Lugar: El Ministerio Público investiga los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, aquellos cometidos dentro del territorio del Estado de San Luis Potosí, así como los que causen efectos dentro de él aunque hayan sido ejecutados fuera de éste; por lo que atendiendo a ese ámbito de competencia territorial, se trata de todo el territorio del Estado de San Luis Potosí, porque podría afectar a otras entidades, puesto que las actividades de procuración de justicia se pueden realizar de forma coordinada con otras Fiscalías Estatales.

Se deberán precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría un riesgo de perjuicio real, demostrable e identificable al interés jurídico tutelado de que se trate.

Es **real** porque los datos relacionados con las **COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE CADA FOSA CLANDESTINA LOCALIZADA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**, no es un dato estadístico, toda vez que lo que se está solicitando, se trata de un registro que se encuentra relacionado directamente con las investigaciones que se llevan a cabo en cada una de las Carpetas de Investigación y Averiguaciones Previas a cargo de esta Unidad, mismas que se encuentran aún en etapa de investigación, por lo que dar a conocer los datos solicitados, podría entorpecer las investigaciones que realizan los Ministerios Públicos, repercutiendo en el avance y resultado que se pretende obtener en las mismas, vulnerando así, el derecho de acceso a la justicia con el que cuentan las Víctimas.

Sin dejar de lado que se pondría en riesgo la integridad física, incluso psicológica de las familias de las Víctimas, de los servidores públicos que interviene en las investigaciones, hasta del mismo solicitante, en razón de que al tener en su poder información relacionada con el lugar exacto del hallazgo de fosas clandestinas, mismas que están asociadas directamente con hechos ilícitos; ya que podría acudir al sitio y con ese hecho no solo obstaculizar la conducción de las investigaciones, si no que pondría en riesgo su vida y la de terceros, ya que no tendría conocimiento de las condiciones o peligrosidad del lugar.

Es **identificable** ya que al hacerse pública la información permitiría dar a conocer el lugar exacto del hecho que se está investigando, llegando a propiciar la sustracción de la justicia de los indiciados, así como menoscabar el nivel, capacidad de respuesta o estrategia de investigación de esta Fiscalía General, propiciando que cualquier persona interesada en la información solicitada pudiera emplearla para causar daños en la seguridad y a la paz social, reiterando que vulneraría la integridad no solo de las mismas Víctimas y sus familiares, sino también de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Policías de Investigación, así como de cada uno de los servidores públicos intervinientes en las diligencias en materia de desaparición de personas, siendo susceptibles de ataques u atentados en su contra.



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

Es **demostrable** en razón de que divulgar la información afectaría la actividad esencial de la Fiscalía General del Estado que es la de procurar justicia y defender los intereses de la sociedad en general, así como la reparación del daño de las víctimas u ofendidos del delito; además de que propiciaría que las víctimas se abstengan de denunciar posibles hechos delictivos en el futuro, así como, el aumento de delitos cometidos al no demostrar la presunta responsabilidad de los imputados, razones por las cuales, toda la información que verse dentro de las Carpetas de Investigación o Averiguaciones Previas debe mantener en sigilo, ya que derivada directamente de los hechos de algún delito.

Mediante una ponderación entre la medida restrictiva y el derecho de acceso a la información, deberán justificar y probar objetivamente mediante los elementos señalados en la fracción anterior, que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio que supera al interés público de que la información se difunda;

Es Indudable que el acceso a la información al ser un derecho fundamental es reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligando a las autoridades a respetarlo, protegerlo y garantizarlo.

Siendo así, que el derecho de acceso a la información que le asiste a la solicitante, le permite obtener datos que se encuentran en los archivos de la Fiscalía General del Estado, el mismo no es absoluto y está sujeto a diversos principios, bases y limitantes, ya que si bien prevalece entre otros principios el de máxima publicidad, también está sujeto a las restricciones establecidas en la propia norma Constitucional y que se regulan en la legislación secundaria.

Robusteciendo lo anterior y en base a una ponderación de derechos me permito hacer de su conocimiento que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en el ámbito de su competencia promueve, respeta, protege y garantiza el derecho de acceso a la información pública de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad acorde a lo estipulado por el artículo 1 párrafo tercero de la Constitución; por lo que ante todo ejercicio de todo derecho a la información que haga un particular se analiza la proporcionalidad entre la invasión que pudiera ocasionarse por la divulgación de información y el interés público de la información.

Lo anterior debido a que en la mayoría de los casos se sigue de oficio un procedimiento, el cual se convierte en un proceso deliberativo el cual no es público hasta en tanto no se resuelva.

Sirve de sustento a lo anterior la siguientes Tesis Jurisprudencial de la 9ª Época, con Registro: 169574, emitida por el Pleno, con Fuente el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, junio de 2008. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 54/2008. Página: 743

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada



**FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ**

garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en **cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva**; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral pública, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Citando lo anterior, la Fiscalía General del Estado que es un ente que defiende los intereses de la sociedad mediante la procuración de justicia y reparación del daño, dar a conocer información concerniente a investigaciones derivadas de hechos delictivos podría interferir con el desarrollo de la investigación y puede propiciar o conllevar un riesgo grave a la conducción de la investigación, contraviniendo con el objetivo de esclarecer el hecho, proteger al inocente, contando los probables responsables con elementos que pudieran utilizar para evitar el ejercicio de la acción penal, para ocultar los medios de prueba y evidencias que permitan confirmar la existencia de un delito o la responsabilidad de una persona, ocasionando que no se lleve a cabo la reparación del daño.

Si bien es cierto existe el derecho de acceso a la información también lo es que dicho derecho debe tener una utilidad pública, y en este caso no se detecta que la información solicitada lo sea, en razón de que difundir la información podría entorpecer la conducción de las Carpetas de Investigación y alterar el lugar de los hechos.

En el mismo sentido, la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las Víctimas, a la procuración de justicia, a conocer la verdad, a la debida diligencia de la investigación y que esta sea inmediata y exhaustiva, así como a obtener una reparación integral por los daños sufridos, pero sobre todo a conocer la suerte o el paradero de las Víctimas Directas, y por otro lado, que los autores de los delitos con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; prevalecen al derecho de acceso a la información de la solicitante.

Deberán elegir y justificar la opción de excepción al derecho de acceso a la información que menos lo restrinja y que sea adecuada y proporcional para evitar el perjuicio al interés público, evitando siempre que sea posible la reserva absoluta de documentos o expedientes; y

La limitación de acceso a la información, en este caso la clasificación de reserva, obedece a que la Fiscalía General del Estado protege los bienes más valiosos como lo es la vida, la integridad física y el derecho de acceso a la justicia, los cuales se pondrían en riesgo al hacer pública la información solicitada, ya que traería consigo una interferencia en el desarrollo de la investigación y previendo que para ejercer el derecho de acceso a la información no se requiere acreditar personalidad ni el interés jurídico, esta autoridad, desconoce con qué finalidad se solicita la información.



Por lo anterior, la Clasificación de reserva de la información con fundamento en el artículo **129 fracción XI** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí concatenado con el numeral **Trigésimo Primero** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, como lo es el artículo 2018 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo que “los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables”, no interfiere en el ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón de que este tiene sus limitaciones, en donde no toda la información en posesión de los sujetos obligados puede ser difundida, como es el caso del lugar derivados de hechos presuntamente constitutivos de delito, por ello, dar a conocer la información solicitada, se estaría incumpliendo en la obligación de reservar información que expresamente tiene ese carácter.

Por lo anterior, reservar la información representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio que se pudiera ocasionar el dar a conocer la información solicitada.

Sirve de sustento a lo anterior la siguientes Tesis

Época: Décima Época

Registro: 2000234

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. VIII/2012 (10a.)

Página: 656

INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3)



**FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ**

averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.


VIII. Fecha del acuerdo de clasificación, y

10 de octubre del 2024

X. La rúbrica


**LICENCIADA LUZ MARIA MONTES MARIANO
TITULAR DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION DE PERSONAS
DESAPARECIDAS O EXTRAVIADAS**

De conformidad con el artículo 128, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, el cual refiere que, el cuerdo que clasifique la información como reservada deberá contener la rúbrica de los miembros del Comité, se procede en consecuencia.


**MAESTRA XITLALIC SANCHEZ SERVIN
VICEFISCAL JURIDICO Y PRESIDENTA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**


**LIC. PEDRO GÓMEZ ÁVILA
VICEFISCAL E INTEGRANTE DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA**


**LICENCIADO JUAN MANUEL WILLIE ROSILLO
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALIA
GENERAL DEL ESTADO E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA**

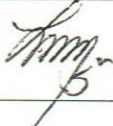

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



FECHA DE CLASIFICACIÓN.	10 DE OCTUBRE DE 2024		
ÁREA.	UNIDAD PARA LA ATENCION DE PERSONAS DESAPARECIDAS O EXTRAVIADAS		
ACUERDO.	ACUERDO DE RESERVA PARCIAL UPDE/FMDH/0004/2024-AR		
INFORMACIÓN RESERVADA	COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE CADA FOSA CLANDESTINA LOCALIZADA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024		
PERIODO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA	A PARTIR DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 CONCLUYENDO EL 10 DE OCTUBRE DEL 2029		
FUNDAMENTO LEGAL.	ARTÍCULO 6 APARTADO A FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULO 17 FRACCÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 3º FRACCIONES II, XXI, XXXV, 120 FRACCIÓN I, 129 FRACCIONES XI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, NUMERAL TRIGÉSIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN INFORMACIÓN; ARTICULO 105 y 218 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; ARTICULO 157 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICION COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS		
AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA.	PODRÁ RESERVARSE POR CINCO AÑOS MÁS, PREVIA SOLICITUD FORMULADA POR LA AUTORIDAD GENERADORA DE LA INFORMACIÓN		
RUBRICA DEL TITULAR DEL ÁREA.			
FECHA DE DESCLASIFICACIÓN			
RUBRICA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DEL TESTADO.	 TITULAR DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS O EXTRAVIADAS		

